

## **Carta de San José**

Nosotros, la Red Latino Americana de Usuarios de Drogas (LANPUD), venimos a, a través de ésta, expresar nuestra indignación con la actual política internacional de drogas. Somos ciudadanos y ciudadanas con plenos derechos, usuarios de drogas que son ilegales en la mayoría de nuestros países, integrantes de diversos movimientos sociales, unidos en la defensa de los derechos humanos. Estamos integrados por representantes de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Brasil, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Somos parte de un movimiento a favor de la reforma de las políticas de drogas y la defensa de usar sustancias psicoactivas mientras que esto no ocasione perjuicios a terceros.

La política de drogas vigente es responsable – entre otras calamidades – de la criminalización de la pobreza y el favorecimiento del narcotráfico, que violan ostensible y diariamente los derechos humanos de millones de individuos simplemente por su condición de usuarios de drogas declaradas ilícitas. Tenemos la convicción de que el mercado ilícito es responsable de la violencia, además de generar graves problemas de salud por cuenta del estigma y la discriminación de las que son víctimas las personas que usan drogas - y asimismo por la pésima calidad de las drogas que se venden en el mercado ilegal -, lo que coloca a estas personas en situación de gran vulnerabilidad social.

Nosotros, los estigmatizados por una cultura moralista y alimentadora de fundamentalismos, reivindicamos ahora los mismos derechos ya garantizados a minorías organizadas a partir de movimientos sociales. Exigimos, como ciudadanos contribuyentes, consumidores y, sobre todo, como seres humanos, el cumplimiento de la promesa del Estado democrático del derecho, a saber: por un lado de respetar las libertades individuales y garantizar la inviolabilidad de cuerpo y mente, y, por otro, de garantizar a los usuarios el mismo derecho (incluso el acceso a los servicios públicos) sin preconcebidos, sin coacción, presión ni coerción de ningún tipo. Porque nadie debería dejar de ser ciudadano sólo por el hecho de ser usuario de drogas. Exigimos una política de drogas que respete los derechos de los ciudadanos cobijados por los Estados Democráticos. La inmensa mayoría de nosotros, personas que usamos drogas, somos individuos que no causamos ningún tipo de daños a la sociedad. Y, para la minoría de usuarios problemáticos (cerca del 10%) exigimos tratamientos, sin penalización ni encierro forzoso, y acceso a las políticas en curso de Reducción de Daños y prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Sobre todo, exigimos el poder de deliberación en las diferentes instancias políticas, veeduría y participación en las políticas públicas y en todo aquello que nos concierna.

4 de setiembre de 2014

San José de Costa Rica